



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA

Carpeta N° 145 de 2020

Repartido N° 49

Abril de 2020

FERIA JURISDICCIONAL EXTRAORDINARIA

Se establece suspensión de plazos

- Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Senadores Charles Carrera, Raúl Lozano, Gustavo Penadés y Adrián Peña.

XLIXa Legislatura

CAMARA DE SENADORES	
Recibido a la hora	17:10
Fecha	27/4/2020
Carpetas N°	145/2020

Proyecto de ley sobre FERIA Jurisdiccional Extraordinaria, suspensión de plazos y otras medidas a raíz de la situación de emergencia sanitaria

Exposición de motivos

1. El viernes 13 de marzo de 2020, las autoridades nacionales confirmaron los primeros casos de coronavirus COVID-19 en Uruguay. A raíz de ello, el decreto del Poder Ejecutivo 93/2020 declaró la “Emergencia Sanitaria”, y desde el gobierno se han ido anunciando diversas medidas y/o exhortaciones para combatir el avance de dicho virus en nuestro país. Algunas de ellas pasan por el aislamiento social, en ciertos casos de carácter obligatorio, y evitar las aglomeraciones de personas.

El lunes 16 de marzo de 2020, la Suprema Corte de Justicia se declaró en “Feria Judicial Sanitaria” desde el 14 de marzo hasta el 3 de abril de 2020 inclusive (resolución N° 12/2020). La regulación de la “Feria Judicial Sanitaria” implicó, entre otras cosas, una declaración de días inhábiles, reducción del horario de funcionamiento de los tribunales, y medidas para la prevención y protocolos de actuación ante la eventualidad de usuarios y/o funcionarios judiciales infectados por coronavirus COVID-19. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia extendió la “Feria Judicial Sanitaria” hasta el 30 de abril de 2020 inclusive (resolución N° 23/2020).

En el mismo sentido, el 16 de marzo de 2020 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por acordada N° 8/2020, determinó el ingreso al estado de feria extraordinaria por emergencia sanitaria hasta el 3 de abril de 2020. A su vez, por acordada N° 9/2020 se dispuso que, por permanecer vigente la situación de emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19, la continuidad del período de Feria Extraordinaria por emergencia sanitaria hasta el 30 de abril de 2020.

En paralelo a ello, el gobierno nacional ya ha anunciado la extensión de ciertas medidas de prevención y/o combate del coronavirus COVID-19 por tiempo aún indefinido.

2. Ante esa circunstancia, es posible que personas físicas y jurídicas, titulares de legítimos derechos subjetivos y situaciones jurídicas, puedan ser afectadas en el ejercicio de sus derechos de acción, defensa y tutela efectiva, en el ámbito de los procesos jurisdiccionales, procedimientos administrativos y ante personas públicas paraestatales. En el ámbito administrativo y paraestatal, diferentes han sido las soluciones emanadas de cada organismo.

En el seno jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo las resoluciones antes mencionadas, dictadas en el ámbito de sus competencias, dispusieron la limitación de la actividad jurisdiccional, reservándola únicamente para los procesos que pudieran ser susceptibles de grave perjuicio (artículo 97 del CGP).

No obstante ello, es posible que, a pesar de las medidas adoptadas, éstas puedan quedar sujetas a diferentes interpretaciones o cuestionada su legalidad y, además, diversas situaciones jurídicas pudieron devenir lesionadas por las dificultades o imposibilidad de ejercicio por los interesados o por el vencimiento de plazos.

En ese escenario es prioritario dar certeza y seguridad a todas las personas, con un criterio amplio e incumbente, basado en un supuesto objetivo que derive de la ley, evitando así los criterios subjetivos que cada interprete pueda realizar de las normas actualmente vigentes.

Las soluciones que se proponen son similares a las adoptadas en otros países ante la situación generada por la pandemia: así, por ejemplo, el Real Decreto de España N° 463/2020, de 14 de marzo de 2020, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo de 2020.

3. En el entendido que había suficientes razones para su rápida consideración y aprobación, los Diputados Rodrigo Goñi, Diego Echeverría y Mario Colman por el Partido Nacional; Claudia Hugo, Cecilia Bottino, Nicolás Mesa y Mariano Tucci por el Frente Amplio, Ope Pasquet por el Partido Colorado, Ivan Posadas por el Partido Independiente, Cesar Vega, entre otros), recogieron el anteproyecto elaborado y

propuesto por el Colegio de Abogados del Uruguay, dando estado parlamentario a dicha iniciativa.

4. El Proyecto fue ingresado a Cámara de Representantes con fecha 16 de abril, y enviado a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, como “Feria Jurisdiccional Extraordinaria. Emergencia Sanitaria. Se establece suspensión de plazos. C/120 /2020. Rep35”. -

La Comisión convocó a reunión extraordinaria para el 22 de abril, a fin de tratar el asunto referido, y recibir al Colegio de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y a la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. En dicha comparecencia, las delegaciones comparecientes, reafirmaron la conveniencia de la aprobación del proyecto e hicieron algunas sugerencias para mayor claridad y certeza. En el mismo sentido lo hizo por escrito el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. -

5. Considerando que la fecha establecida para la finalización de la Feria Extraordinaria vence el próximo 30 de abril, y la conveniencia de procurar su aprobación antes de esa fecha para prevenir un eventual e innecesario aluvión de personas a los Juzgados a partir del lunes 4 de mayo, se presenta este proyecto de ley con las mismas características y finalidad, que el presentado en la Cámara de Representantes. De lo contrario, y dadas las circunstancias que en esta última semana – previa al vencimiento de la Feria- el Senado sesionará antes que la Cámara de Diputados, no sería posible lograr su aprobación antes de las fechas indicadas. -

6. Cabe destacar que el texto del proyecto que ahora se propone, ha incorporado la mayor parte de las sugerencias de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en consulta con los miembros de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados.

7. En el entendido que una norma con un alcance como la que se proyecta, será de enorme utilidad en los ámbitos de actuación antes indicados, y generará una equilibrada y justa contemplación de los derechos de las personas afectadas, con la consiguiente certeza para todos los operadores del Sistema Judicial, de la Administración Pública y de las Personas

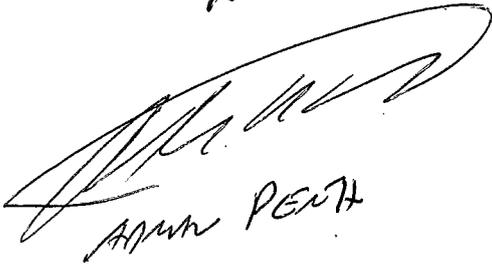
de Derecho Público no Estatal, y como se expresó también necesaria para evitar aglomeraciones que podrían ocurrir de no ser sancionada antes del próximo 4 de mayo.-



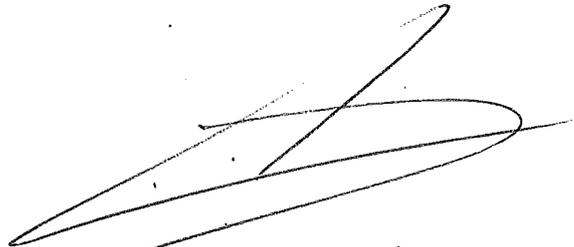
Rodolfo



Gustavo C. Penadés
Senador



ANNA PEÑA



Charles Carrera Col.

Proyecto de ley

Artículo 1º. FERIA JURISDICCIONAL EXTRAORDINARIA Y SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES.

1.1. Declárase con carácter interpretativo que, a falta de reglamentación legal según prevé el artículo 332 de la Constitución de la República, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio de sus facultades constitucionales de superintendencia administrativa, son competentes para disponer Ferias Judiciales Extraordinarias en estados de emergencia que, por causas de extraordinaria alteración de la vida en sociedad, no imputables a la Administración de Justicia, hagan imposible el normal funcionamiento del servicio o las garantías para el ejercicio de los derechos de los justiciables.

1.2. Declárase vigente una FERIA JURISDICCIONAL EXTRAORDINARIA desde el 14 de marzo de 2020, para todos los procesos que se tramitan ante los órganos del Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como para cualquier otro proceso jurisdiccional.

La FERIA JURISDICCIONAL EXTRAORDINARIA se extenderá hasta que se disponga, por la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en sus respectivos ámbitos de actuación, el cese del receso. Dicha decisión deberá adoptarse por cada uno de esos órganos en función de las medidas que se dispongan por el Poder Ejecutivo en atención al estado de emergencia sanitaria actualmente vigente, las posibilidades de prestación normal del servicio y las condiciones de efectivo acceso a la justicia.

1.3. Durante el transcurso de la FERIA JURISDICCIONAL EXTRAORDINARIA declárase suspendidos todos los plazos procesales, incluso aquellos que se computan en meses o años.

A los efectos de esta ley se considera plazo procesal todo período de tiempo vinculado a cualquier proceso jurisdiccional, inclusive los previstos en las leyes procesales para presentar una demanda principal o incidental, o para ejercitar cualquier medio impugnativo.

Declárase que los plazos para el dictado de sentencias interlocutorias y definitivas se encuentran suspendidos entre el 14 de marzo de 2020 y 11 de mayo de 2020.

Declárase, con fines aclaratorios, que el tiempo transcurrido durante la FERIA JURISDICCIONAL EXTRAORDINARIA, no se computará a los efectos de la perención de la instancia.

1.4. Declárase aplicable a la FERIA Jurisdiccional Extraordinaria lo previsto para las ferias judiciales en el artículo 10 de la ley 15.869, de 22 de junio de 1987, salvo en cuanto resulte modificado por la presente ley.

1.5. Autorízase a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a reducir, postergar e incluso eliminar la feria judicial comprendida entre el 1 y 15 de julio de 2020, si ello resultara necesario a juicio de esos órganos, en atención a la extensión de la FERIA Jurisdiccional Extraordinaria y la necesidad de restablecer el normal funcionamiento del sistema, para una efectiva tutela de los derechos.

Artículo 2º. Disposiciones especiales aplicables a la FERIA Jurisdiccional Extraordinaria. 2.1. Durante la FERIA Jurisdiccional Extraordinaria, sin perjuicio de la suspensión de los plazos procesales, los jueces y los ministros de los Tribunales de Apelaciones, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo deberán realizar todos aquellos actos que sea posible cumplir y disponer, en guardias mínimas que aseguren el funcionamiento, a esos efectos de las oficinas judiciales, incluso en modalidad de teletrabajo.

Las oficinas de los distintos órganos jurisdiccionales también deberán realizar todas las actividades que sea posible ordenar y cumplir, en régimen de guardias mínimas e incluso en modalidad de teletrabajo, de acuerdo a lo que disponga la reglamentación de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sus respectivos ámbitos de actuación.

2.2. La suspensión de plazos dispuesta en el artículo anterior no afectará la validez de los actos procesales cumplidos durante su transcurso.

2.3. Sin perjuicio de la posibilidad de habilitar días y horas inhábiles de acuerdo a lo dispuesto por las disposiciones vigentes, declárase que a los efectos de esta FERIA Jurisdiccional Extraordinaria se consideran hábiles a todos los efectos los días y horas de funcionamiento de las oficinas para los siguientes supuestos:

- (a) Adopción, modificación, sustitución, ejecución o cese de medidas cautelares, provisionales.
- (b) Adopción, modificación, sustitución, ejecución o cese de las medidas autosatisfactivas previstas en leyes especiales.

- (c) Procesos de amparo y todos aquellos que tramiten por la misma o similar estructura procesal.
- (d) Procesos vinculados con la violencia doméstica y contra las mujeres basada en género (leyes 17.514, de 2 de julio de 2002, y 19.580, de 22 de diciembre de 2017, y sus complementarias, modificativas o concordantes).
- (e) Procesos para situaciones de urgencia previstos en la ley 17.823, de 7 de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y la Adolescencia) y sus complementarias, modificativas o concordantes.
- (f) Procesos penales y de adolescentes, para cualquier actuación con personas privadas de libertad, la adopción, modificación, sustitución o cese de las medidas cautelares de prisión preventiva y prisión domiciliaria, y el otorgamiento de libertades en otros supuestos.
- (g) Las actuaciones que sea necesario realizar de acuerdo a lo previsto en el artículo 288 de la ley 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), a cuyo efecto deberá utilizarse el sistema de la videoconferencia.
- (h) Las actuaciones relativas a internaciones urgentes por razones de salud mental.
- (i) Las actuaciones relativas a aperturas de cuenta y libramiento de órdenes de pago en cualquier proceso.
- (j) Dictado y notificación de sentencias interlocutorias y definitivas.

Autorízase a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo añadir otros supuestos de similares características a los mencionados en este ordinal.

Artículo 3°. Suspensión de los plazos de prescripciones o caducidades. 3.1. Decláranse suspendidos a partir del 14 de marzo de 2020 y por todo el término en que se extienda la Feria Jurisdiccional Extraordinaria, todos los plazos de prescripción extintiva y caducidad establecidos por la normativa vigente.

Declárase que cualquier derecho o interés jurídicamente protegido, sujeto a prescripción o caducidad, que no se haya ejercitado en el período antes referido, mantiene su plena existencia y exigibilidad, por lo que podrá ejercitarse una vez que cese la Feria Jurisdiccional Extraordinaria, dentro del plazo correspondiente, descontado el período de tiempo correspondiente a la suspensión dispuesta en este artículo.

Decláranse expresamente incluidos en la suspensión dispuesta en este artículo todos los plazos de prescripción y caducidad de las acciones frente a personas públicas estatales y no estatales, entre ellos, los términos establecidos en el artículo 39 de la ley 11.925, de

27 de marzo de 1953, el artículo 106 de la ley 15.167, de 6 de agosto de 1981, en la redacción dada por el artículo 8° de la ley 16.226, de 29 de octubre de 1991, y en el inciso segundo del artículo 4° de la ley 16.011, de 19 de diciembre de 1988.

3.2. Quedan excluidos de la suspensión prevista en el presente artículo:

- (a) los plazos de prescripción de delitos y faltas penales;
- (b) los plazos de prescripción de infracciones aduaneras y tributarias;
- (c) los plazos de prescripción de faltas administrativas; y
- (d) las caducidades establecidas por el artículo 79 de la ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997, sus modificativas y concordantes.
- (e) el plazo establecido por el artículo 165 de la Acordada 7865 de la Suprema Corte de Justicia.
- (f) el plazo establecido por el artículo 113 de la Ley 15.750 de 24 de junio de 1985.

También se considera excluido el plazo previsto en el artículo 265 de la ley 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), en la redacción dada por el artículo 23 de la ley 19.549 de 25 de octubre de 2017.

Todos estos plazos se seguirán computando de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 4°. Disposiciones especiales para los procesos contenciosos anulatorios o actos o procedimientos que constituyen presupuesto de aquellos. Sin perjuicio de lo ya establecido en el artículo 1°, a los solos efectos aclaratorios, declárase suspendidos desde el 14 de marzo y por el término de duración de la Feria Jurisdiccional Extraordinaria todos los plazos establecidos para los procesos en los que se pretende la anulación de actos dictados por personas públicas estatales y no estatales, incluyendo especialmente los relativos a:

- (a) Los plazos para interponer recursos administrativos ante las resoluciones de todo órgano público, estatal o no estatal, establecido como requisito para el agotamiento de una vía administrativa (artículo 317 de la Constitución de la República y leyes especiales aplicables). Sin perjuicio de lo anterior, los recursos presentados serán tramitados conforme las reglas de procedimiento aplicables. No se suspenderá en ningún caso el plazo previsto por las leyes para la configuración de la denegatoria ficta de los mismos.
- (b) Los plazos de caducidad de las acciones de nulidad, cualquiera sea su sistema de cómputo. En el caso de la acción de nulidad contra actos administrativos definitivos previstos en el artículo 309 de la Constitución de la República, la suspensión alcanzará a la caducidad de sesenta días contados desde el dictado

de la resolución denegatoria de los recursos, expresa o ficta, como la de dos años contados desde la interposición de los recursos (artículo 9 de la ley 15.869, de 22 de junio de 1987 y leyes concordantes y modificativas).

- (c) Los plazos para la configuración de la presunción simple contra el demandado por la no resolución expresa de los recursos administrativos (artículo 6 de la ley 15.869, de 22 de junio de 1987).

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el órgano jurisdiccional actuante podrá admitir o disponer la práctica de cualquier actuación que sea necesaria para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las personas involucradas en el proceso, de acuerdo al régimen general de habilitación de días y horas inhábiles.

Declárase que los plazos para el dictado de sentencias interlocutorias y definitivas se encuentran suspendidos entre el 14 de marzo de 2020 y 11 de mayo de 2020.

Artículo 5º. Medidas transitorias referidas a los procedimientos administrativos durante la Feria Jurisdiccional Extraordinaria. 5.1. Los jefes de los diferentes servicios velarán por la incorporación, uso y difusión de vías electrónicas y telemáticas de relacionamiento remoto con los interesados conforme a lo preceptuado por el inciso primero del artículo 75 de la ley 19.355, de 19 de diciembre de 2015.

Durante la vigencia de la emergencia sanitaria dispuesta por el Poder Ejecutivo, se podrá interponer cualquier escrito de petición o recurso administrativo, sin perjuicio de la suspensión del plazo por efecto de la Feria Jurisdiccional Extraordinaria, mediante comunicación electrónica a las casillas institucionales del órgano destinatario o emisor del acto cuestionado o su delegante. Las administraciones darán curso a los escritos presentados, difiriendo hasta el cese de la declaración de emergencia sanitaria la ratificación de firmas si así lo dispusieren los reglamentos aplicables.

5.2. En todos los casos, los plazos para evacuar vistas conferidas comenzarán a contarse desde que se produzca el acceso al expediente administrativo completo en soporte electrónico por parte del interesado.

La notificación personal se realizará en el domicilio electrónico constituido por aquél y se considerará realizada, así como el acceso al expediente verificado, cuando el mensaje de notificación y el expediente electrónico completo, o la información suficiente para acceder a él remotamente, estén disponibles en la casilla de destino constituida por el interesado.

En la notificación se incluirá información sobre las vías disponibles para la presentación electrónica del escrito de evacuación de vista, requisito sin el cual no se computará el

plazo conferido legal o reglamentariamente para su evacuación. Los escritos respetarán los requisitos establecidos en las normas legales o reglamentarias aplicables y se presentarán firmados por el interesado y su abogado cuando ello corresponda, escaneados en formato pdf. no editable. Las administraciones darán curso a los escritos presentados, difiriendo hasta el cese de la declaración de emergencia sanitaria la ratificación de firmas si así lo dispusieren los reglamentos aplicables.

En los procedimientos de contratación administrativa a los que resulte aplicable, el plazo previsto en el artículo 506 de la ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 41 de la ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011, comenzará a contarse desde que se notifique a los interesados en sus casillas electrónicas constituidas, los informes técnicos y de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, en su caso. Sin perjuicio de ello, se pondrá a disposición el expediente completo en las oficinas administrativas para su consulta personal por el plazo previsto legalmente.

5.3. En las restantes actuaciones administrativas que involucren controles o defensas de los interesados (audiencias, obtención o presentación de pruebas, etcétera) los órganos de la administración continuarán la tramitación siempre que sea posible su realización por medios electrónicos utilizando tecnologías que mantengan las garantías para los interesados así como la fiabilidad de las actuaciones que permitan calificarse como similares a las que ofrecen los medios establecidos para los procedimientos en condiciones de normalidad.

Si ello no fuera posible a juicio de los funcionarios actuantes, previa noticia a los interesados, se postergará la realización de las medidas para luego de finalizada la declaración de emergencia sanitaria y se suspenderán los plazos administrativos con que cuentan los funcionarios para la realización de los trámites. Si el interesado, debidamente asistido, consintiere expresa o tácitamente el medio electrónico propuesto, se proseguirán las actuaciones.

5.4. Los jefes de los diferentes servicios velarán por la aplicación racional y ponderada del presente artículo, evitando tanto la paralización innecesaria de los trámites administrativos como la afectación de los derechos y garantías de los interesados.

5.5. Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto desde el día hábil siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo.

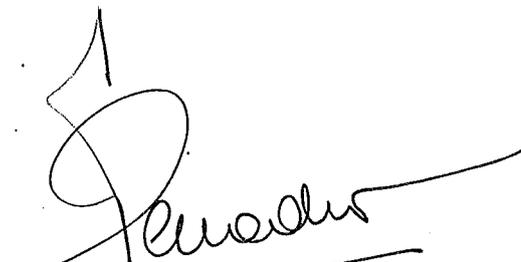
Artículo 6°. Reglas de interpretación e integración. En caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones contenidas en la presente ley, y en caso de supuestos no regulados, deberá preferir la interpretación o integrar con la solución que ampare más eficazmente

el acceso pleno a la efectiva tutela jurisdiccional o administrativa, y resulte ajustada a los principios de debido procedimiento o proceso, contradicción y *pro actione*.

Artículo 7º. Vigencia. Esta ley entrará en vigencia en la fecha de su promulgación.



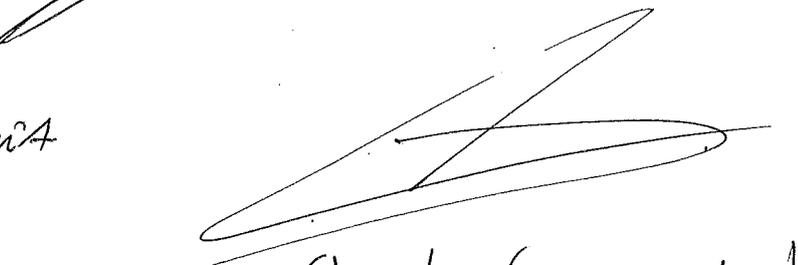
HORACIO



RENADES



Anna Rosa



Charles Gonzalez

